

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 19º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-7035-2023  
CARATULADO : HUAQUILAF/FISCO DE CHILE

Santiago, treinta y uno de Enero de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

Con fecha 26 de abril del 2023, comparece **don Víctor Hugo Ramírez Valenzuela**, abogado, en representación de **don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa**, pensionado, domiciliado en Población San Máximo, pasaje Los Jazmines N°339, comuna de San Clemente; de **don Juan Carlos Gaete Castro**, pensionado, con domicilio en pasaje 2 Norte N°3598, comuna de Talca; de **don Sergio Gonzalo Barraza Benavides**, pensionado, con domicilio en Parcela N°222, Lote Uno A, sector Corralones, Mariposa, comuna de San Clemente; **don Miguel Barrientos Álvarez**, pensionado, con domicilio en calle Cerro Moreno N°1699, Villa Capitán Ávalos, comuna de La Florida, y de **don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez**, pensionado, domiciliado en Avenida Parque del Este N°6600, comuna de Puente Alto; y viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por **el Presidente del Consejo de Defensa del Estado**, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1225 piso 4º, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a fin que sea acogida y se condene a la demandada al pago de la suma de **\$200.000.000.- a cada uno de los demandantes**, o en su defecto la suma que el Tribunal estime en justicia, más reajustes e intereses y costas.

Con fecha 15 de junio del 2023, la parte demandada fue notificada en forma personal subsidiaria de la demanda.



Con fecha 07 de julio del 2023, comparece la demandada y evacúa la contestación de la demanda.

Con fecha 12 de julio del 2023, se tiene por evacuada la contestación de la demanda y se confiere traslado a la réplica.

Con fecha 16 de julio del 2023, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 18 de julio del 2023, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica y se confirió traslado a la dúplica.

Con fecha 25 de julio del 2023, se evacuó el trámite de la dúplica.

Con fecha 01 de agosto del 2023, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica y se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 07 de diciembre del 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que comparece don Víctor Hugo Ramírez Valenzuela, abogado, en representación de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, de don Juan Carlos Gaete Castro, don Sergio Gonzalo Barraza Benavides, don Miguel Barrientos Álvarez y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, y viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado.

#### Antecedentes de hecho

##### a. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura.

Señala que en sus calidades de detenidos, torturados y condenados políticos los actores hicieron la denuncia de cada uno de sus casos a la Comisión Valech y en ella fueron reconocidos como víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. Así las cosas, figuran en la nómina de personas reconocidas como víctimas bajo los siguientes



números; Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, bajo el N°5853 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech II); Juan Carlos Gaete Castro, bajo el N°3253 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech II); Sergio Gonzalo Barraza Benavides, bajo el N°2650 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech I); Miguel Barrientos Álvarez, bajo el N°952 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech II) y; Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, bajo el N°4130 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech II)

Lógicamente existe un reconocimiento del Estado de Chile de que los demandantes fueron víctimas del accionar delictivo de funcionarios públicos que los violentaron, sin haber cometido ningún delito, solo por mantener convicciones políticas diferentes a las del Régimen.

b. Relación de hechos de cada demandante.

Relata que “don **Tomás Eugenio Muñoz Tolosa**, el año 1973 trabajaba como obrero agrícola en el Asentamiento Manuel Larraín en la comuna de San Clemente, cuyo sindicato pertenecía a la Federación Manuel Rodríguez la que se componía de varios sindicatos de la VII Región. Lamentablemente mi representado apenas sucedió el golpe de Estado junto a muchos de sus compañeros fue desvinculado, iniciándose una larga cesantía que duró hasta el año 1978, época en que sin trabajo y con una familia compuesta por su esposa y 4 hijos se acercó a la Confederación Obrero Campesina donde le ofrecieron la posibilidad de impartir cursos de sindicalización, los que se llevaban a efecto en la Vicaría de la Solidaridad ubicada frente a la Plaza de Armas de Santiago.

En el contexto señalado y en la propiedad donde funcionaba la Confederación, esto es, entre calles Catedral y Compañía de Santiago, el día 10 de septiembre del año 1978 ingresaron militares y civiles cargando



*metralletas deteniendo violentamente a mi representado y a un compañero menor de edad.*

*En el segundo piso de ese local había una mesa de ping pong y fotografías del Che Guevara, entonces, los militares llenaron la mesa de armas y lo obligaron a ponerse detrás para proceder a fotografiarlo como evidencia que respaldara su detención. Lamentablemente, luego de fotografiarlo lo amarraron a un camarote y comenzaron a golpearlo fuertemente con golpes de pies, puños y elementos contundentes, luego de lo cual le pusieron una venda y lo obligaron a subir un vehículo en el que lo trasladaron a un lugar que no logra identificar y en el que estuvo 2 días privado de libertad. La noche que don Tomás pasó bajo custodia de los agentes del Estado, fue violentamente torturado.*

*La tarde del 12 de septiembre del año 1978 mi representado fue obligado a subir a un vehículo, donde se le trasladó hasta una casa cerca de la Confederación donde trabajaba, allí se sacó la venda y se escondió hasta bajo una escalera hasta el día siguiente. Apenas amaneció fue corriendo a conversar con el Cardenal Raúl Silva Henríquez para agradecerle su intervención porque fue gracias al recurso de amparo que el sacerdote presentó en su favor que mi representado no pasó más tiempo preso. El Cardenal le indicó que hablaría con uno de sus compañeros para que lo resguardara porque en San Clemente, su pueblo natal y donde vivía su familia, lo buscaban agentes del Estado quienes habían ido a casa de sus padres para obtener información, así las cosas, don Tomás vivió 2 meses bajo la clandestinidad encerrado en la casa de un compañero.*

*A fines del año 1978 don Tomás retornó a San Clemente, a la casa de sus padres, allí comenzó la verdadera persecución porque constantemente militares o Carabineros acudían a casa de sus padres, donde vivía junto a su familia, preguntaban por él, a veces lo detenían hasta el día siguiente o allanaban la casa ingresando violentamente y registrándolo todo. Nunca lo dejaron en paz por lo que con la ayuda de don Alfonso Gutiérrez pudo trasladarse con su familia a un campo en la comuna de Duao donde le permitieron trabajar y vivir con su familia, esto, hasta que a don Alfonso le comenzaron a preguntar por la situación de mi*



*representado amenazándolo de tomar represalias en su contra. Finalmente, don Tomás y su familia debieron abandonar el campo para trasladarse a la ciudad de Talca donde pasó un año cesante y escondido porque sabía que lo buscaban.*

*El año 1980 don Tomás consiguió trabajo como ayudante de topógrafo en una empresa perteneciente a un Consorcio Brasileño – Mexicano donde sin perjuicio de conseguir estabilidad laboral comenzó a vivir un quiebre familiar, separándose de su mujer Julia Medel, quien no soportó los cambios de vida y la constante situación de amenaza en la que vivía junto a su familia. Así las cosas, el año 1983 don Tomás perdió a su familia, separándose de su mujer y de sus 4 hijos.*

*Indudablemente lo que más afectó a mi representado fue el hecho de haberse destruido su hogar porque fue a partir de la detención y la posterior persecución a don Tomás que la relación conyugal se volvió inestable, sobre todo considerando las graves carencias económicas por las que pasó su familia, lo que sumado a la grave depresión que afectó al actor como consecuencia de verse imposibilitado de sacar adelante a su familia destruyeron su relación marital y con sus hijos, quienes lo culparon por las carencias que ellos también vivieron.”*

Sobre don **Juan Carlos Gaete Castro**, relata que “fue detenido el 05 de agosto del año 1975 desde el domicilio de su compañero Osvaldo Guerrero, quien vivía en el pasaje La Casona N° 5185 de la comuna de San Miguel en Santiago. Ese día, alrededor de las 03:00 irrumpió en el domicilio señalado un grupo de militares que encañonaron tanto a mi representado como a su compañero, quien era en definitiva al que buscaban.

*Así las cosas, los agentes del Estado que participaron de la detención luego de agredir a don Juan Carlos y a don Osvaldo los encapucharon y los obligaron a subir a un vehículo trasladándolos a un lugar del que mi representado no tiene mayor noción que escuchar mucho ruido de aviones o de aeronaves, por lo que presume haber estado en algún recinto de la FACH de Santiago.*



*Don Juan Carlos debió permanecer 10 días privado de libertad en el mismo lugar, tiempo en el cual estuvo encapuchado, sin bañarse, comiendo lo justo y necesario para sobrevivir, sin visitas de su familia y con la obligación, los 3 primeros días detenido, de permanecer de pie apoyado contra una pared y con los brazos en alto, lo que con el paso del tiempo se transformó en una feroz tortura porque no podía dormir ya que cada vez que bajaba los brazos lo golpeaban con elementos contundentes que mi representado identificaba como las culatas de fusiles.*

*Sin perjuicio de las inhumanas condiciones de habitabilidad y sobre exigencia física en que se mantuvo don Juan Carlos, fue sometido a varias sesiones de interrogatorios con sus consecuentes torturas, siendo consultado sobre una supuesta internación de armas, todos hechos que desconocía completamente. En dichos interrogatorios y ante las respuestas negativas de mi representado se le agredía brutalmente con golpes de pies, puños y elementos contundentes quedando en al menos 2 oportunidades a punto de desfallecer por los golpes. Cabe mencionar que el día en que se otorgó la libertad, mi representado fue sometido a un simulacro de fusilamiento, experiencia que hasta el día de hoy recuerda como en extremo traumatizante puesto que pensó que verdaderamente iba a perder la vida.*

*Fueron de tal magnitud las torturas de las que fue víctima mi representado que una vez libre, debió permanecer 15 días en cama para recuperarse físicamente ya que incluso comenzó a orinar sangre por la cantidad de golpes que recibió en la ingle y en el estómago.*

*Cabe señalar que el año 1975 mi representado era estudiante de la carrera de Pedagogía en historia y Geografía en la Universidad de Chile, ejerciendo como asistente de cátedra, función por la que obtenía un pequeño sueldo que le permitía mantenerse económicamente. Como consecuencia de su detención fue separado de la carrera, perdiendo su calidad de estudiante y obviamente su ingreso como asistente de cátedra.*

*Sin la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios debió trabajar en lo que pudo para sobrevivir ya que su familia se encontraba en la comuna de Constitución, no pudiendo viajar donde sus padres porque*



*todos tenían afiliación política y era muy peligroso para el volver a Constitución, a saber: don Juan Carlos estaba inscrito en las Juventudes Comunistas, su madre era comunista al igual que su hermanastro y su padrastro. Toda la familia fue buscada, incluso su hermanastro y su padrastro fueron detenidos. Por tal motivo don Juan Carlos debió vivir de incógnito varios meses después de recuperar su libertad, incluso tuvo que trasladarse a la comuna de Los Ángeles puesto que en Santiago ya lo habían identificado y por lo demás, se le habían cerrado todas las puertas desde el punto de vista laboral.*

*En Los Ángeles don Juan Carlos pudo reunir dinero para escapar del país ya que en Chile corría peligro inminente de ser detenido o peor aún, de perder la vida a manos de agentes del Estado, todo, sin posibilidad alguna de surgir desde el punto de vista laboral por lo ya expuesto. Así las cosas, mi representado emigró a España el año 1977, viviendo en Madrid por 3 años para luego radicarse en la ciudad de Sofía, en Bulgaria, allí vivió por 10 años hasta el año 1990, época en la que retornó a Chile.*

*La situación en la que don Juan Carlos llegó a España fue precaria, apenas llevaba una manta para cubrirse y 75 dólares en el bolsillo, no tenía contactos laborales ni apoyo de amigos o familiares. Una vez en Madrid acudió a la pequeña colonia de chilenos en Madrid, allí fue donde consiguió ayuda para encontrar trabajo, desempeñándose como copero en El Escorial, luego de un año de trabajo fue ascendiendo y adquiriendo mayores responsabilidades, terminando como encargado del local, oficio que desempeñaba con agrado porque le permitía tener dinero para sobrevivir y pagar sus estudios de sicología en la Universidad Complutense de Madrid.*

*El año 1980 el Partido Comunista chileno le ofreció una beca a mi representado para estudiar en Bulgaria, posibilidad a la que accedió sin perjuicio de no saber el idioma ni tener vínculos sociales en ese país. Finalmente estudió 4 años y logró completar un doctorado, tiempo en el cual se integró completamente a la sociedad de Bulgaria formando familia con una chilena hija de exiliados.*



*Una vez que don Juan Carlos retornó a nuestro país el año 1980 se radicó en la comuna de Constitución trabajando junto a su madre en principio y luego ejerciendo como sicólogo en la Municipalidad de dicha comuna. Con el paso de los años mi representado se radicó en Talca, trabajando en el Hospital de esta comuna y en la Universidad de Talca como docente.*

*Sin perjuicio de haber logrado reincorporarse a la sociedad gracias a la resiliencia propia del carácter de don Juan Carlos y luego de mucho esfuerzo, las consecuencias emocionales de lo vivido en dictadura igualmente afectaron al actor, quien vivió por años con miedo y temor, sufriendo estrés post traumático, el que se ha manifestado incluso recientemente. Cabe señalar que en el tiempo en que don Juan Carlos recuperó su libertad tuvo que recomponer su autoestima puesto que las torturas sufridas habían socavado lo más profundo de su ser, afectando la autopercepción que tenía de si mismo, así las cosas, debió realizar un proceso de autoayuda personal para salir adelante porque de no superar esa limitante no podría desenvolverse con normalidad en la sociedad, tanto así, que don Juan Carlos estudió sicología para ayudarse y ayudar a otros con experiencias traumáticas como la suya.*

*Cabe señalar también que el actor sufrió por años problemas de insomnio, no podía dormir y cuando lograba conciliar el sueño éste no era reparador, debiendo incluso medicarse para poder descansar.”*

Respecto de don **Sergio Gonzalo Barraza Benavides**, señala que “fue detenido el 07 de septiembre del año 1987. En esa época mi representado pertenecía al Partido Socialista y era políticamente activo ya que regularmente organizaba reuniones a las que asistían sus compañeros de partido.

*El mes de julio del año 1987 a don Sergio se le informó que era buscado por la CNI por lo que durante todo el mes de agosto de ese año permaneció en la clandestinidad escondido en casas de seguridad del Partido, sin perjuicio de lo cual y cuando estaba en una casa de la comuna de Puente Alto, llegaron 3 vehículos a la propiedad, descendiendo de éstos*





6 agentes de civil y para sorpresa de don Sergio, también bajó de uno de los vehículos doña Flor Benavides, su madre, al verla supo que debía entregarse porque de lo contrario la expondría al riesgo de permanecer en las garras de los agentes de Estado.

Ese día don Sergio miraba por la ventana de la casa y al ver a su madre salió por la puerta principal de la misma, siendo violentamente detenido por los funcionarios policiales, quienes inmediatamente comenzaron a agredirlo con golpes de pies y puños, obligándolo a subir a uno de los vehículos para proceder a ponerle parches en los ojos y una venda, luego de lo cual lo obligaron a poner su cabeza entre sus piernas mientras le apuntaban con un arma en la nuca.

Una vez que el vehículo se puso en marcha dio varias vueltas sin saber don Sergio por donde transitaba, se detuvieron, bajándose mi representado y sus captores, quienes le ordenaron desnudarse y entre 2 o 3 lo golpearon mientras otro lo inmovilizaba por la espalda. En esa oportunidad el actor recibió golpes de pies, puños y con elementos contundentes en todo el cuerpo, pero lo peor de todo fue que le aplicaron corriente eléctrica en los testículos, en la boca y en las manos. Tan brutal fue la golpiza que don Sergio casi se desmayó, sus captores al verlo tan mal físicamente dejaron de agredirlo y le entregaron un overol que le quedaba chico para que se cubriera, obligándolo nuevamente a subir al vehículo.

Luego de varias vueltas, don Sergio descendió del vehículo nuevamente para ser trasladado por sus captores a un lugar que recuerda pequeño porque apenas cabía el y una camarote, allí lo obligaron a permanecer con la cara hacia la pared mientras le retiraban la venda y los parches de los ojos, mi representado se percató que estaba en una sala con paredes de cemento y una puerta con una pequeña mirilla, no había nada de luz ni en el cuarto ni fuera de éste.

Don Sergio permaneció en esa habitación por 15 días completos, siendo liberado el 25 de septiembre del año 1987, tiempo en el cual fue sometido casi todos los días a sesiones de tortura, sufriendo aplicación de corriente eléctrica en los testículos y en partes sensibles de su cuerpo y



*colgamiento estilo Pau Arara en solo 2 oportunidades, el resto de los días en que fue torturado se le agredía principalmente con elementos contundentes. Cabe señalar que cada vez que don Sergio era retirado de la pieza para ser torturado le ponían una capucha para cegarlo, por lo que jamás supo donde estuvo detenido.*

*El día en que don Sergio recuperó su libertad lo obligaron a subir a un vehículo con la vista vendada señalándole que lo iban a fusilar, él iba con la cabeza entre las piernas llorando, estaba seguro que perdería la vida esa tarde, pero solo era una cruel broma de sus captores ya que pasado un tiempo lo bajaron del vehículo y se alejaron, mi representado estaba de rodillas, llorando, sin saber que pasaría hasta que su abuela lo fue a abrazar señalándole que estaba a salvo.*

*Esta experiencia marcó la vida no solo de don Sergio sino que también de su familia paterna con quienes vivía, ya que era el mayor de sus 4 hermanos, todos quienes vivían con su madre y su abuela materna. El hecho de ver a su madre, a su abuela y a sus hermanos menores vivir por años con miedo a ser detenidos marcó su carácter hasta el día de hoy. Desde que don Sergio fue detenido cayó un manto de pena y tristeza sobre su familia ya que vivían con temor incluso de salir a la calle, tanto así que a mi representado su padre le prohibió salir siquiera fuera de la casa por 3 meses, tiempo en el cual mi representado estuvo escondido de la autoridad porque tenía la certeza de que sería detenido nuevamente.*

*Cabe señalar que don Sergio mantiene hasta el día de hoy la calidad de exonerado porque a consecuencia de la detención que sufrió perdió su trabajo como garzón en la Hostería “El Refugio” ubicada en el sector de San José de Maipo, debiendo sufrir una cesantía que se extendió por años ya que cada vez que buscaba trabajo era discriminado ya que en su certificado de antecedentes se leía “requerido por el Ministerio del Interior”, nadie le dio trabajo por mucho tiempo lo que para un joven de 22 años fue desastroso y le imposibilitó cualquier posibilidad de surgimiento social y económico.*



*Desde el punto de vista emocional mi representado sufrió delirios de persecución, transformándose en una persona desconfiada de quienes lo rodeaban, vivía con una sensación de inestabilidad que, junto a la pena de su madre y abuela marcó su carácter transformándolo en una persona taciturna y retirada socialmente, sin perjuicio de lo cual en su fuero interno tenía una sensación creciente de revanchismo y rebeldía en contra de la autoridad, emociones con la que vivió por años sin tratamiento alguno y que afloraron hace alrededor de 10 años, cuando dejó de trabajar por la edad, volviéndose una persona agresiva y autorreferente, cayendo además en una profunda depresión que debió tratarse con la asistencia de profesionales médicos.”*

Sobre don **Miguel Barrientos Álvarez**, relata que “*nació en la comuna de Puerto Octay, donde cursó sus estudios básicos siendo enviado por sus padres a la ciudad de Santiago para que cursara estudios medios y tuviera la posibilidad de tener una mejor formación académica. Así las cosas y pese a los problemas de adaptación a su nueva ciudad, cursó una excelente enseñanza media y logró ingresar a estudiar la carrera de Filosofía a la Pontificia Universidad Católica, específicamente en el campus Oriente ubicado en la comuna de Providencia. El año 1983, cuando mi representado ingresó a la universidad, coincidió con un ciclo de protestas de estudiantes en contra del Régimen, por lo que fue un año agitado pero que para don Miguel, quien se sumó a dicha lucha tenía plena legitimidad.*

*El año 1984 y por su participación política, el estudiante de Filosofía Octavio Carrasco fue expulsado de la carrera, motivo por el cual don Miguel y sus compañeros a título de protesta se tomaron el campus universitario, jamás imaginaron el nivel de represión del que serían víctimas ya que en menos de una hora desde que se “tomaron” el Campus, ingreso al mismo un grupo Carabineros quienes agresivamente los detuvieron, siendo trasladado don Miguel junto a 21 estudiantes más, a la 19ª Comisaría de Providencia.*

*Don Miguel y sus compañeros estuvieron detenidos en esa Comisaría por 5 días completos, desde el 13 al 18 de junio de ese año, tiempo en el cual agentes de la CNI trataron de llevarlos a sus propios cuarteles, lo que*



*no pudieron atendido el hecho de que la detención de los 22 estudiantes fue noticia nacional. Así las cosas y ante la imposibilidad de trasladar a los estudiantes, los agentes de la CNI llevaron a cabo interrogatorios en la misma Comisaría, específicamente, en el subterráneo de dicho centro policial, allí mi representado fue interrogado donde supuestas “actividades subversivas” siendo golpeado constantemente con golpes de puño, pies y con elementos contundentes, además de ser fotografiado desnudo y amenazado de muerte.*

*Luego de la detención sufrida por mi representado y sus compañeros, don Miguel fue expulsado de la Universidad, con la prohibición expresa de ingresar a otra carrera o universidad, quedando en una especie de “lista negra”, lo que comprobó cuando intentó ingresar a la Universidad de Valparaíso, pero dicho ingreso le fue negado. Este “veto” para ingresar a estudiar y pese a tener solo 18 años de edad, truncó su posibilidad de transformarse en profesional.*

*El mes de septiembre del año 1984 y en el contexto de una protesta nacional contra la dictadura, don Miguel fue detenido nuevamente a unas cuadras de su casa, siendo golpeado por funcionarios de civiles y obligado a ingresar al maletero del auto siendo trasladado al Cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna de San Miguel, en el traslado cada cierto tiempo el vehículo se detenía y uno de sus captores abría la cajuela para golpearlo. En dicho cuartel mi representado estuvo una semana detenido, siendo constantemente agredido con golpes de pies y puño, incluso en una oportunidad fue colgado de las muñecas para ser golpeado en las costillas. En esta segunda detención mi representado fue trasladado a la Cárcel de San Miguel, donde permaneció privado de libertad por 15 días.*

*Así las cosas y atendidos los dos hechos represivos de los que se dio cuenta con anterioridad, mi representado permaneció en 30 días detenido por agentes del Estado y en distintas partes.*

*Sin perjuicio de la gravedad de las experiencias vividas en su juventud, don Miguel el año 2013 ingresó a estudiar la carrera de Sociología, titulándose con honores, incluso tuvo el segundo mejor*



*rendimiento de sus compañeros lo que lo llenó de orgullo puesto que finalmente, pese a todas las trabas que la dictadura puso en su camino logró torcerle la mano al destino y obtener una carrera universitaria. Lamentablemente y con ocasión de su edad, mi representado no ha logrado obtener un trabajo ejerciendo su profesión de sociólogo, hoy en día sigue trabajando como guardia de seguridad, debiendo para mejorar su Currículum Vitae y lograr trabajar como profesional, inscribirse en el Magíster de Gobierno y Gerencia Pública, el que le ha otorgado la calidad de egresado con un promedio de notas de 6,5. El Magíster referido solo logra financiarlo gracias a una beca que obtuvo y que cubre la mitad del arancel anual.*

*El daño que se le provocó a don Miguel respecto de la falta de oportunidades que tuvo como consecuencia de haber sido discriminado académicamente resulta evidente y se patenta incluso el día de hoy, cuando pese a tener un título profesional debe continuar trabajando como guardia de seguridad. Atendido estos hechos resulta loable la resiliencia de don Miguel, quien pese a su edad y a tener todo en contra, sigue luchando por superar los resabios de la dictadura, que se manifestaron, en su caso, como la imposibilidad de obtener un título profesional y de mejorar su condición socio económica por años.*

*Además de lo referido desde el punto de vista profesional, es obvio el daño emocional que los hechos represivos relatados en esta ocasión provocaron en su persona, generando un quiebre en su estructura de personalidad que no solo lo afecta a él, sino que también a su familia. ”*

Respecto de don **Marcos Francisco Huiquilaf Gómez**, relata que “es oriundo de la ciudad de Valdivia, pese a lo cual el año 1981 ingresó a la carrera de Filosofía a la Pontificia Universidad Católica, específicamente en el campus Oriente ubicado en la comuna de Providencia.

*Al igual que don Miguel Barrientos, don Marcos se sumó a las protestas que se organizaron en la Universidad por la expulsión, el año 1984 del estudiante de Filosofía Octavio Carrasco, motivo por el cual don marcos y sus compañeros a título de protesta se tomaron el campus*



*universitario, jamás imaginaron el nivel de represión del que serían víctimas ya que en menos de una hora desde que se “tomaron” el Campus, ingreso al mismo un grupo Carabineros quienes agresivamente los detuvieron, siendo trasladado don Marcos junto a 21 estudiantes más, a la 19ª Comisaría de Providencia.*

*Tal como en el relato de don Miguel Barrientos, don Marcos fue torturado por agentes de la CNI en el subterráneo de la Comisaría donde estaba detenido junto a sus compañeros siendo agredido física y psicológicamente porque hasta el día de hoy mi representado se sorprende de la cantidad de información que manejaban las autoridades sobre su persona y su familia, le mencionaron a todos los integrantes de su familia y el domicilio de cada uno de ellos, lo que evidentemente le preocupó sobremanera porque sintió que los podía exponer a sufrir alguna detención o peor aún, a ser torturados por agentes de Estado.*

*Tal como le ocurrió a don Miguel Barrientos, don Marcos fue expulsado de la Universidad pese a cursar 4º año de estudios y estar a solo uno de titularse, prohibiéndosele el ingreso a cualquier universidad del país, por lo que mi representado volvió a casa de sus padres, quienes en esa fecha vivían en la ciudad de Temuco, finalmente mi representado lograría titularse como Profesor de Historia y Geografía el año 1989.*

*Como es posible concluir el daño que se le provocó a mi representado no solo dice relación con los 5 días que permaneció privado de libertad, sino que también y principalmente con la pérdida de oportunidades que le irrigó el haber sido expulsado de la universidad a solo un año de titularse de la carrera de Filosofía. Don Marcos obtuvo su título a los 27 años de edad, debiendo haberse titulado con 23 años y no de la carrera de profesor, sino que de la de filosofía, como era su pretensión original.*

*Así las cosas, resulta de tal magnitud la intromisión de la dictadura en la vida de mi representado que condicionó no solo su forma de ser, ya que por años vivió con el temor constante de ser detenido nuevamente y con una evidente sensación de injusticia, sino que lo condicionó*



*profesionalmente hasta el día de hoy y no solo a él, sino que también a su familia marcando un quiebre en su historia vital, generando consecuencias hasta el día de hoy. ”*

### El derecho

#### a. De la responsabilidad por los daños y del deber de reparación.

Señala que los apremios a los que fueron sometidos mis representados, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la Comunidad Internacional como de Lesa Humanidad según lo establecido en el Estatuto Militar de Nüremberg del año 1945, actualizada con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada el año 1998.

Hoy es prácticamente unánime tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que la responsabilidad de los órganos del Estado por las lesiones que puedan causar afectando derechos de las personas, se funda en normas de derecho público y no de derecho privado como las que se derivan de las normas del Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual, también llamada responsabilidad aquiliana.

En el presente caso concurren dos fuentes normativas principales, una, es la propia Constitución Política del Estado y otra, de derecho público internacional en materia de derechos humanos como es la que deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras. Desde un punto de vista del derecho público interno, ella descansa en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política; dicha normativa debe ser interpretada al tenor de lo señalado en el artículo Primero inciso 4° y en el artículo Quinto inciso 2° de nuestra Carta Fundamental. El que la norma constitucional separe el hecho de la lesión del agente culposo, de acuerdo a la frase final del precepto *“sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño ”*, nos pone frente a lo que la doctrina denomina la responsabilidad objetiva del Estado, fundada ella en una norma de derecho público, distinta de la civil.

Para que operase esta responsabilidad objetiva de la Administración bastaría que concurriesen tres elementos copulativamente:



1. Lesión de un derecho;
2. Lesión causada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones; y
3. Relación causal entre los mismos.

Es dable hacer presente que en este caso en concreto hay un reconocimiento del Estado de Chile de que cada uno de los demandantes fueron víctimas del delito de torturas, catalogado como de lesa humanidad. En este sentido la “falta de servicio” resulta obvia y evidente, existió en todos los casos expuestos en esta demanda y en el de muchos compatriotas más que fueron víctimas del Régimen Totalitario impuesto por Augusto Pinochet un más que mal funcionamiento del servicio, un reprochable actuar de la Administración porque actuando a través de sus agentes, vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos de nuestros compatriotas.

La segunda fuente normativa es del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No hay duda que el cobarde actuar de los Agentes de Estado que lesionaron la dignidad de mis representados, en el contexto político producido constituyó un delito de lesa humanidad internacionalmente considerando y sancionado como tal. Violándose, entre otros, el Derecho a la Integridad Personal, protegido por el artículo 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Nuestro Estado, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional o bien, concurriendo con su voto a la aprobación de resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ha adquirido una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. Así las cosas, en materia de Derechos Humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales.

Respecto de la normativa aplicable en la materia es dable señalar que el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un deber general de reparación a favor del lesionado en el goce de un





derecho o libertad conculcado. Este deber no se encuentra obviamente restringido al órgano jurisdiccional internacional, sino que estamos frente a un mandato normativo de carácter internacional pero internalizado en el nuestro derecho interno con la ratificación por Chile de Convención, mandato que compromete al Estado a adoptar las medidas legislativas u otras de adecuación del derecho interno, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Como bien lo ha declarado la Corte Interamericana este deber de adecuación de la legislación interna a la normativa de Derechos Humanos no es de carácter programático sino un deber actual y exigible.

Arguye que no hay duda de que los tormentos y vejámenes que sus representados sufrieron, considerando el contexto político producido constituyen delitos de lesa humanidad. Respecto a lo indicado, el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional señala: *“Crímenes de lesa humanidad.- Para los efectos del presente Estatuto se entenderán por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque;*

*f) Tortura (...)*

*k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”*

Agrega que los delitos de los cuales fueron víctimas, tienen el carácter de crímenes internacionales, siendo considerados como de lesa humanidad porque la Comunidad Internacional es agraviada o afectada en su totalidad al producirse. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada en 1948 y luego de la experiencia de los Tribunales Militares de Nuremberg existe conciencia internacional de no tolerarse estas conductas. La tortura es de aquellos delitos que destruyen lo más preciado de la persona humana, de tal modo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en su artículo 7º. Del mismo modo, en el sistema Interamericano de protección de los derechos



humanos la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la tortura en su artículo 5°.

Sin perjuicio de la normativa referida se debe tener presente el artículo 2. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala; *“Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violadas podrán interponer un recurso efectivo”*, lo que supone el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. En este contexto encontramos también el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005, el cual señala que; *“Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”*.

Así las cosas, respecto de la obligación de cumplimiento para el Estado de los Tratados ratificados por éste y que se refieren a normativa que resguarda los Derechos Humanos, se manifiesta a través de 3 obligaciones principales:

1. Respeto, esto es cumplir directamente la conducta establecida en el tratado, adoptando medidas efectivas para hacer cumplir el tratado.

2. Garantía, esto es promover la posibilidad real y efectiva de que las personas sujetas a su jurisdicción ejerzan sus derechos y disfruten de las libertades que se les reconocen, creando condiciones para que ello se produzca. Para cumplir con esta obligación de garantía existen ciertas formas;

- La obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos



- El deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados o públicos en el goce de los derechos

- Adoptar medidas de prevención general frente a casos de violaciones graves de derechos

- Reparar a las víctimas (Como medida final, en todo caso de violación de derechos humanos, el Estado deberá reparar a las víctimas de acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en el DIDH: restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición).

- Cooperar con los órganos internacionales para que estos puedan desarrollar sus actividades de control

### 3. No discriminación.

Cabe advertir además que los tratados internacionales relativos a derechos humanos se interpretan siempre en el sentido pro persona, debiendo primar la interpretación que mejor garantice los Derechos Humanos.

En cuanto al deber de reparación que tiene el Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo clarificador en cuanto a establecer que el Estado de Chile es responsable de los delitos de Lesa Humanidad cometidos por sus agentes en período de Dictadura Militar y tiene la obligación de reparar a las víctimas. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 29 de Noviembre de 2018, ya citado, resulta importante además porque fija la postura de nuestro país frente a la comunidad internacional al tratar el tema de la prescripción respecto de demandas de reparación motivadas por delitos de lesa humanidad, estableciendo una posición clara respecto del tema, que no es aplicable la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por daños y perjuicios ocasionados por ese tipo de hechos, expresada en el motivo 90, 91 y 92 de dicha sentencia.

Sin perjuicio de la normativa internacional señalada, que de por si es clarificadora respecto de que se entiende por delitos de lesa humanidad, en



nuestro país existen leyes que tipifican los crímenes de lesa humanidad y establecen penas para quienes lleguen a ejecutarlos, así las cosas, el artículo 1º de la Ley N° 20.357 señala: *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:*

*1º Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.*

*2º Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.*

Finalmente, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del demandado, ya individualizado, acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000 a cada uno de los demandantes, o en su defecto el monto indemnizatorio que se estime ajustado a equidad y al mérito de autos, todo con costas.

**SEGUNDO:** Que el Fisco de Chile al comparecer, evacúa la contestación de la demanda, solicitando su completo rechazo y en subsidio, solicita la rebaja sustancial del monto indemnizatorio pretendido. Primeramente, efectúa una breve síntesis de la demanda, procediendo a indicar las excepciones, defensas y alegaciones, que se detallaran a continuación.

Primera Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.



Señala que es necesario comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos para efectos de posiciones estas indemnizaciones dentro del panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional (Sriram, Chandra Lekha, *Confronting Past Human Rights Violations*. New York, 2004, pp. 5). Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, hace presente que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Se debe recordar que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas (Greiff, Pablo de, ed. *The Handbook of Reparations*. Oxford, Oxford University Press, 2006, p.2).

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.



Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño (Lira, Elizabeth; Loveman, Brian. Políticas de reparación. Chile 1990-2004. Santiago, LOM, 2005 p. 76).

#### La complejidad reparatoria.

Acude nuevamente a lo expresado por Elizabeth Lira, indicando los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse" (Lira, Elizabeth, The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile, en de Greiff, Pablo ed. The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 56).

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en



términos generales, *"reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas"*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación: *"un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe"*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de



compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y; c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional particular del país, el que busca la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

#### Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Al respecto, le parece necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: **a)** Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); **b)** Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y **c)** Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-; **d)** Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella





comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido en general, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Reparaciones específicas: Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso concreto, señala que todos los demandantes han recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes 19.234, 19.992 y sus modificaciones, la que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000. De esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias



monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Rule of Law tools for post-conflicts states. Reparations programmes, New York, United Nations, p. 28).

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los



consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda

#### Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño



extrapatrimonial, indica que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, *"pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) "Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida" y b) "Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo"* (Fueyo L., Fernando, Instituciones de Derecho Civil Moderno, Santiago, Ed. Jurídica, 1990, p. 52).

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: 1) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; 2) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido- desaparecido; 3) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; 4) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; 5) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "*Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia*" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el



Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”* (C Suprema.,



Domic Bezic, Maja y otros con Fisco [2002] Rol 4753-2001, Considerandos 28° a 34°).

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, en que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que: "*DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: "Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley". De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la*



*pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos" (C. Suprema, Rivera Orellana, Flor y otros con Fisco de Chile, 30 de enero de 2013, Rol 4742-2012).*

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente "*reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*" (C. Suprema, Espinoza Figueroa y Rioseco Espinoza con Fisco de Chile, Rol 1963-2005; C. Santiago, Espinosa Olea con Fisco de Chile, Rol 2400-2002), lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que "*la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una*



*compensación económica por concepto de daño inmaterial...*” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, cons. 161).

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Un documento denominado "Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos" (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008 op. cit., p. 35).

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de





Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación (Lira, Elizabeth, op. Cit. 2006, p. 94).

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, el demandante ya fue indemnizado a través de las leyes de reparación, por tal motivo opone formalmente la excepción de reparación integral, la que acreditará en la oportunidad procesal correspondiente.

## II.- Segunda Excepción: Prescripción Extintiva.

Además, de la excepción anterior, indica que opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, según los argumentos que detallará a continuación.

### Normas de prescripción aplicables.

Indica que la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios que interpone se funda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes.

Alega que conforme al relato efectuado por los actores, las detenciones ilegales y torturas que habrían sufrido, ocurrieron durante el período de la dictadura militar, específicamente, entre el año 1975 hasta el año 1987según cada uno de los relatos expuestos en el libelo.

En el caso concreto, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15



de junio del 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, ratifica que la excepción de prescripción opuesta es la de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, señala que viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

#### Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *"Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible"* (Alessandri, Somarriva y Vodanovic. Tratado de Las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. 2- Ed. 2004. Volumen III. p. 181). Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Estima que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *"para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad"* (C. Santiago, 08 de abril de 1982. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXX, Sec. 2-, p. 38).

Hace presente que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del



Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: "*Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo*".

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión "igualmente" que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

#### Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar firmeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en del orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.



Por las mismas razones, consigna que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

#### Jurisprudencia sobre la prescripción.

Señala que la Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó el día 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Al efecto, en relación a distintos puntos, procede a citar dicho fallo de la siguiente manera.

En relación al principio general que debe regir en materia de prescriptibilidad, cita lo siguiente: "*Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad*



*jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia”.*

En cuanto a los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, señala que no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal y al efecto procede a citar lo siguiente: "Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991 (...) "Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la



*materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1º sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. (...) Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio. (...) Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados”.*

Respecto a no existir una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, indica que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular



por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. Así, junto con el considerando octavo antes citado, reproduce considerando décimo que dice: "*Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*".

No obstante lo anterior, alega que el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. Las sentencias anteriores y posteriores fallo que se cita en este apartado, no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa y que solicita se tenga en especial consideración al momento de resolver el juicio, en conformidad al referido fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013, que aplicó la institución de la prescripción en la materia de autos.

#### Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Así lo ha hecho presente la doctrina fiscal en sus diversas defensas y de la misma manera lo ha recogido reiteradamente la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

En tal sentido, estima que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza



especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Normas contenidas en el Derecho internacional.

Finalmente, aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, declarando de antemano que ninguno de ellos contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

La "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema, que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto la Corte Suprema.





La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile, ergo, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a los Tribunales nacionales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Señala que el planteamiento de su defensa fiscal sobre prescripción ha sido reconocido por la Corte Suprema en la sentencia de fecha de 24 de julio de 2007 rol corte 1133-2006, caratulados "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile", que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar: "*VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que*



*cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991. (...) VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables. Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada - basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso".*

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa "Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile", autos ingreso N° 4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, estima que el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.



Alegación sobre el daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000 por cada uno de los demandantes.-

Fijación de la indemnización por daño moral.

Hace presente no puede dejar de considerarse que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Al respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado: "*Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido*" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXX, Sec. 4a. pág. 61). En la perspectiva antes indicada, estima que la regulación del monto de la indemnización



debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago (Diez Schwerter, José Luis. El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Jurídica de Chile, año 1998, pág. 256). En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

En tal sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891-2013, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: *"Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio - lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto".*



Excepción subsidiaria de consideración de los pagos ya recibidos del Estado y que guarden armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega que la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, estima pertinente hacer presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.



El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

La jurisprudencia de los tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, *"En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio"*.

Por consiguiente, el hipotético caso que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

**TERCERO:** Que la demandante al evacuar el trámite de la réplica, reitera íntegramente la demanda, señalando lo siguiente respecto a las excepciones opuestas por la demandada:

I. En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva

Señala que todas las reparaciones indicadas en la contestación se refieren al cumplimiento de una obligación que mantiene el Fisco de Chile para con la comunidad internacional y no dicen relación alguna con el dolor que le ocasionó a sus representados los hechos de que da cuenta la demanda de autos, pretender lo anterior, implicaría asumir que el Poder Legislativo cumplió funciones propias del Poder Judicial al momento de



regular anticipada e infundadamente (porque no se tenía conocimiento del dolor y aflicción de cada caso en particular) una indemnización por daño moral, como la que se solicita por medio de la presente acción.

Así las cosas, no existiendo identidad entre lo que se pide en la demanda de autos y las reparaciones señaladas (Ley 19.992 y otras) la reparación satisfactiva que alega el Fisco de Chile no puede ser considerada como tal, porque no hay transferencia de dinero ni otro tipo de asignaciones que hagan referencia expresa a los hechos que se contienen en la demanda de autos, beneficios que por lo demás, están regulados por Ley y tienen aplicación general y no particular, como si lo tiene la sentencia de un Tribunal.

Así las cosas y atendida la naturaleza asistencial de las pensiones determinadas por la Ley 19.992 y otras, no existe incompatibilidad en la reparación efectiva del daño provocado por agentes del estado en período de dictadura militar y los beneficios obtenidos por las víctimas de estas acciones.

En razón de lo señalado, resulta imposible entender que existe un doble beneficio por el mismo daño puesto que la única indemnización que sus representados han solicitado respecto de lo sufrido en Dictadura es a partir de la presente acción, las pensiones y otros beneficios no dicen relación con la reparación específica y puntual del daño moral que le provocaron los hechos relatados en la demanda de autos y que no fueron cuestionados por la demandada en su contestación.

Agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 29 de Noviembre de 2018 en caso caratulado “Caso Órdenes Guerra y Otros VS. Chile”, en sus puntos N°96 y N°97, indica lo siguiente: *“el carácter complementario que tiene las reparaciones económicas otorgadas mediante las leyes promulgadas desde la recuperación de la democracia en 1990 con las indemnizaciones obtenidas por la vía judicial, indicando que el otorgamiento de pensiones de la Ley N° 19.123 no impide a las víctimas obtener indemnizaciones por la vía de la demanda indemnizatoria por daño*



*moral, desestimando razonamiento que consideraban la reparación administrativa como excluyente de la reparación judicial”.*

## II. Respecto de la excepción de prescripción

Indica que la naturaleza de la presente acción se refiere a hechos que constituyen violaciones de Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado de Chile en contra de los demandantes de autos, lo que es de máxima trascendencia al definir si efectivamente se trata de una acción que prescribe por aplicación de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. Agrega que tiene la profunda convicción de ello no es así, toda vez que el período en que se cometieron dichas violaciones fue excepcional dentro de la historia de nuestro país, lo que es reconocido por la propia demandada al fijar subsidiariamente como inicio del plazo de prescripción de la presente acción *“la restauración de la democracia”* y no una fecha en concreto. De este modo, resulta evidente que ante dicha situación de excepcionalidad jurídica no resulta posible aplicar la normativa que pretende la demandada.

En razón de lo anterior, el Fisco de Chile no puede asumir 2 posiciones distintas frente a un mismo hecho;

- Para el período comprendido entre la fecha en que se violaron los derechos humanos de mis representados y la *“restauración de la democracia”* no se aplicarían las normas de prescripción contenidas en los artículos 2.332 y en el 2.515 en relación al 2.514, lo que se desprende de los propios dichos de la contraria, a saber *“Es del caso SS. que aún entendiendo suspendida la prescripción durante la dictadura militar, esto es, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia...”*, entendemos que el análisis transcrito se realiza por razones de Justicia y Derecho Humanitario, posición que entendemos se presenta atendidos los tratados internacionales ratificados por nuestro país sobre la materia.

- Sin perjuicio de lo anteriormente señalado para el período posterior a la *“restauración de la democracia”* si se aplicaría la prescripción atendidas





las normas contenidas en el artículo 2.332 del Código Civil, bajo el supuesto de que la vuelta a la democracia trae el efecto inmediato de normalizar la historia de un país que vivió bajo una anormalidad constitucional por más de 17 años.

Arguye que no existe Ley que permita hacer tal distinción, por lo que el Fisco de Chile se encuentra inhabilitado de hacerla. La demandada debió optar por la aplicación de la prescripción desde una fecha cierta, o bien, asumía una posición extraordinaria, para lo cual no se pueden aplicar las normas contenidas en el Código Civil referidas a la prescripción, sino que la normativa internacional que regula la materia, pero no se pueden aplicar ambas teorías.

La indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, en este sentido resulta innegable que por fundarse la presente acción en la reparación de perjuicios por delitos cometidos por el Fisco de Chile catalogados como de “lesa humanidad”, son imprescriptibles al tenor de los tratados internacionales ratificados por Chile, interpretación respecto de la cual los Tribunales Superiores de Justicia se encuentran contestes.

Toda acción derivada de un delito de lesa humanidad tiene la característica de ser imprescriptible, de lo contrario, se vulneran los principios de coherencia, unidad y congruencia que debe mantener el ordenamiento jurídico. En este sentido, invocar normas de derecho civil al determinar la prescriptibilidad de acciones civiles emanadas de un delito de lesa humanidad, pretendiendo que la imprescriptibilidad afecta solo penalmente a los ejecutores de las violaciones de derechos humanos, implica infringir lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política del República, que incorpora el derecho a las víctimas de este tipo de delitos a obtener una reparación íntegra a los daños y perjuicios inferidos a consecuencia de violaciones de derechos humanos, esto, por aplicación directa de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



Así las cosas, por tratarse de una acción derivada de delitos de lesa humanidad y encontrándose comprometido el interés público, la justicia internacional y la buena fe del Estado en el cumplimiento de los Tratados ratificados por Chile, deben necesariamente aplicarse normas de derecho internacional, incluso y sin perjuicio de que por aplicación directa de existir norma expresa en la materia, debe aplicarse dicha normativa contenida en tratados para resguardar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado con la finalidad de no incumplir con lo dispuesto, entre otras normas, con lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

De este modo, las normas de rango internacional imponen un límite al actuar de los poderes públicos del Estado de Chile, sobre todo al poder judicial, no pudiéndose dejar sin aplicación normas internacionales so pretexto de aplicar normas de derecho interno puesto que como se dijo, ello irroga al Estado de Chile responsabilidad frente a la comunidad internacional.

En cuanto al deber de reparación que tiene el Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo clarificador en cuanto a establecer que el Estado de Chile es responsable de los delitos de Lesa Humanidad cometidos por sus agentes en período de Dictadura Militar y tiene la obligación de reparar a las víctimas, a saber, el fallo de fecha 29 de noviembre de 2018 en autos denominados “Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.

Así las cosas y habiéndose clarificado que las acciones civiles y penales derivadas de un delito de lesa humanidad son imprescriptibles y que efectivamente existe legislación internacional que compone el conjunto de normas integradas al Sistema Jurídico Internacional de los Derechos Humanos donde se establece expresamente el derecho de las víctimas a ser reparados íntegramente, cabe hacerse cargo de la aseveración mediante la cual la demandada asegura que la Convención Americana de Derechos Humanos no tiene aplicación en estos casos por haberse suscitado éstos antes de la publicación en el Diario Oficial (05 de Enero de 1991), ello,



atendida la “Reserva” realizada por el Estado de Chile al ratificar dicho tratado.

El Estado no puede sustraerse del cumplimiento de las normas de “*ius cogens*” que protegen los intereses de la humanidad, pues recibiría el repudio del resto de la comunidad internacional. Chile al ser parte de los sistemas universal y regional americano de protección de los derechos humanos ha quedado jurídicamente obligado por su propia voluntad a todas sus normas, incluyendo aquellas que tienen carácter imperativo como el “*ius cogens*”, este es un camino sin retorno, al comprometerse con normas irreversibles como son las referentes al aseguramiento de los derechos esenciales del hombre, lo que exige de todos los miembros del Estado, conciencia y seriedad en la toma de sus decisiones.

Así pues, carece de relevancia la fecha en que los tratados internacionales incorporados al Sistema Jurídico Internacional de los Derechos Humanos fueron ratificados, ni las Declaraciones o Reservas que se practicaran en su oportunidad ya que estas declaraciones pueden referirse y motivarse por las vicisitudes políticas existentes en un determinado momento en nuestro país. Puntualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada en plena transición de la Democracia y la Reserva de aplicación solo a casos que se suscitaran después del 11 de Marzo de 1990 es evidentemente una concesión realizada por el Gobierno de turno en pro de salvaguardar la Democracia en nuestro país, pero jamás va a impedir que las normas denominadas “*ius cogens*” contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos no tengan aplicación, como se pretende por el Fisco, de lo contrario y como se indicó se estaría afectando la Buena Fe Internacional y el correcto cumplimiento de los Tratados Internacionales por parte de nuestro país.

De este modo, la aplicación de las normas denominadas como “*Ius Cogens*” tiene el carácter de aplicación obligatoria para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos por lo que nuestro país mantiene la obligación adquirida internacionalmente de respetar las normas que contienen dicho tipo de normativa sin perjuicio de las indicaciones con que se promulguen.



Del análisis de la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia se desprenden como conclusiones primordiales las siguientes: Que, la imprescriptibilidad de las acciones penales deducidas por delitos de lesa humanidad rige también para el ámbito civil desestimando que estas últimas, por su naturaleza patrimonial sean regidas por normas de carácter civil, ello, atendidas las normas de ius cogens incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución Política de la República. No siendo posible establecer como imprescriptible la sola acción penal en un procedimiento de este tipo, determinando que las acciones civiles efectivamente pueden ser declaradas prescriptibles a la luz de nuestra normativa civil. Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, no es posible para un Estado, dejar sin aplicación las normas contenidas en el Derecho Internacional con la finalidad de contrariar una norma de Derecho Interno.

### III. En cuanto a la regulación del daño moral

Respecto a la cantidad demandada por mis representados, da cuenta del dolor y aflicción que irrogó para su persona el daño que se les ocasionó, lo que deberá ser evaluado por US., mediante la sentencia que se dicte en estos autos.

**CUARTO:** Que al evacuar la dúplica, la demandada señala que da por expresadas la totalidad de las argumentaciones contenidas en la constatación de la demanda de autos, solicitando el rechazo de la demanda. En relación a lo señalado por la demandante en la réplica, señala lo siguiente:

#### I. Improcedencia de la demanda: Excepción de reparación integral.

Señala que el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc. y por eso es integral y no sólo una denominación, como alega en su réplica. Si solo considerara lo que significa en gastos para el Estado y la sociedad en su conjunto resulta claro que persiguió reparar el daño moral. Por otra parte, tampoco puede ser considerada una indemnización fijada unilateralmente, pues desde el momento que los demandantes aceptaron



esta pensión de reparación, aceptó el monto y las condiciones de esta reparación del daño moral sufrido, de modo que ahora no puede desconocer sus efectos. La pensión otorgada por la ley 19.992 tuvo un claro fin reparatorio del daño moral, nunca tuvo el carácter de “pensión de sobrevivencia”, como la han llamado, como aquellas que se otorgan a quienes no han podido obtener una pensión con sus fondos.

Además, sobre este punto, me permito señalar que el fallo pronunciado por la Corte Suprema, en los autos caratulados “*DOMIC BEZIC, MAJA y otros con FISCO*”, que citamos en nuestra contestación a la demanda recogió similar alegación formulada en ese juicio. Con el mérito de las indemnizaciones que en aquel caso recibieron las demandantes – como también ocurre en la especie– la Excelentísima Corte sentenció “que el goce de la pensión de reparación y otros beneficios establecidos en sus normas, no puede ser conciliable con el pago por parte de Fisco de una indemnización por el mismo concepto, si se recuerda que “indemnizar” importa resarcir de un daño o perjuicio o agravio de acuerdo con el sentido natural y obvio de esos términos”. Por ello, declararon los sentenciadores, resulta incompatible la indemnización que se pretende obtener mediante el ejercicio de estas acciones, si las demandantes ya recibieron los beneficios que otorgan la ley N° 19.723.

Todo ello determina que, respecto de las demandantes, y probada que sea la percepción de dichos beneficios, se configure la excepción de reparación integral que opongo, ya que las indemnizaciones demandadas en estos autos son improcedentes, por ser incompatibles con los referidos beneficios otorgados por el Estado.

## II. La excepción de prescripción invocada por esta defensa

Señala que a diferencia de lo sostenido por los actores, cabe recordar que durante más de 10 años la Corte Suprema consideró que la acción prescribía conforme a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en 4 años.

Reitera lo señalado en autos caratulados “DOMIC BEZIC, MAJA y otros con FISCO”, sentencia que se ocupa también de desvirtuar la



afirmación que, en ese juicio, se hizo por los demandantes, en orden a que el carácter de imprescriptible de la acción de indemnización por la responsabilidad extracontractual del Estado en materias de Derecho Público se encuentra, también, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los considerandos vigésimo segundo a vigésimo sexto señalan expresamente que esas normas internacionales tampoco impiden la aplicación de las reglas de la prescripción extintiva en materias como ésta.

Indica que, la afirmación que la contraria estampa en su demanda no ha sido una cuestión pacífica, ya que, a diferencia de lo sostenido en la réplica, también existe una nutrida jurisprudencia que reconoció el carácter prescriptible a la acción deducida en autos.

**QUINTO:** Que al recibir la causa a prueba, se fijan como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: *“1.- Fecha y circunstancias de la detención y tortura de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa; don Juan Carlos Gaete Castro; don Sergio Gonzalo Barraza Benavides; don Miguel Barrientos Álvarez y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez; 2.- Participación culposa o dolosa de agentes del estado en la detención y tortura de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa; don Juan Carlos Gaete Castro; don Sergio Gonzalo Barraza Benavides; don Miguel Barrientos Álvarez y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez; 3.- Efectividad que don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa; don Juan Carlos Gaete Castro; don Sergio Gonzalo Barraza Benavides; don Miguel Barrientos Álvarez y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, fueron reconocidos como víctimas de violación a los derechos humanos por el Estado de Chile; 4.- Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados por cada uno de los actores; 5.- Efectividad de que la indemnización alegada por los demandantes ya ha sido reparada por el Fisco de Chile, términos, monto y fecha de dicha indemnización; 6.- Relación de causalidad entre los perjuicios alegados por los demandantes y los hechos dañosos o culposos imputables al Estado; 7.- Efectividad que la acción de indemnización de perjuicios deducida por el demandante de autos se encuentra prescrita. Hechos constitutivos de dicha prescripción.”*



**SEXTO:** Que la demandante, a fin de fundar sus dichos, ha rendido la siguiente prueba en los autos: 1) Certificado de nacimiento de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa; 2) Copia de página N° 116 de la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Valech II; 3) Copia de recurso de amparo deducido ante la Il. Corte de Apelaciones de Santiago en resguardo de los derechos de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, al que se le asignó el Rol N° 635-75; 4) Certificado de nacimiento de don Juan Carlos Gaete Castro; 5) Copia de página N° 65 de la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Valech II; 6) Constancia expedida con fecha 16 de agosto del año 2010 por doña María del Pilar Barba Buscaglia, directora del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile; 7) Copia de certificado expedido con fecha 20 de agosto del año 2010 por doña María Paz Vergara Low, secretaria ejecutiva de la Vicaría de la Solidaridad; 8) Certificado de nacimiento de don Sergio Gonzalo Barraza Benavides; 9) Página N° 569 de la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Valech I; 10) Certificado de nacimiento de don Miguel Barrientos Álvarez; 11) Página N° 19 de la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Valech II; 12) Certificado de nacimiento de don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez; 13) Página N° 82 de la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Valech II.

**SÉPTIMO:** Que, en audiencia testimonial, ofrecida por la parte demandante, en audiencia de fecha 20 de septiembre del año 2023, se recibió la declaración de los siguientes testigos: Horacio Agustin Rammsy Trivik, Iván Alfredo Araya Araya, Maria Elisa Del Valle Duran, Mauro Alonso Navarrete Jerez, Verónica Isabel Hernandez Ayala, José Carlos Curipan Toledo, Manuel Patricio Díaz Calfiu y Sandra Romane Escaff Del Valle.

#### 1. IVAN ALFREDO ARAYA ARAYA

Respecto del primer punto de prueba señala lo siguiente: Viene en declarar respecto a don Juan Carlos Gaete, indicando que por antecedentes



que tiene en el programa PRAIS de Talca, le consta que él habría sufrido detención en el año 75, posterior a ser expulsado de la Universidad de Chile, lugar donde estudiaba pedagogía en Historia, donde lo dejan con prohibición de estudios en cualquier otra universidad del país; señala que habría sido detenido junto a un amigo con el que vivía. Respecto a la detención, indica que habría sido en el período de 10 días sin saber el lugar específico, al estar con la vista vendada, estimando que estuvo en un lugar de la fuerza aérea, lugar donde sufrió maltratos y torturas de diferentes tipos, principalmente golpizas y amenazas. Indica que entiende que fue sometido a simulacros de fusilamiento. Agrega que don Juan Carlos Gaete era militante de las Juventudes Comunistas y que por esa militancia lo detuvieron. Agrega que también detuvieron a su madre y que esto ocurrió en Santiago.

Respecto del punto de prueba número dos, indica que evidentemente tiene que haber sido agentes del Estado los que lo detuvieron.

Respecto del punto de prueba número cuatro, señala que sufrió la expulsión de la carrera antes de la detención, que tuvo origen político porque era dirigente estudiantil, y la prohibición de entrar a estudiar a otra universidad. Relata que don Juan Carlos Gaete se vio obligado a hacer trabajos menores de subsistencia después de ser expulsado de la universidad, agregando que se fue a España antes del año 1980, lugar donde inició nuevos estudios, haciendo trabajos menores para subsistir. Luego le ofrecieron que estudiara en Bulgaria, lugar en el que conoció a su pareja y tuvo dos hijas. El año 1990 retorna a Chile, siendo difícil su reinserción al país. Indica que en el caso de Juan Carlos está la privatización del daño, que es ocultar al resto la vivencia concreta de la detención y la tortura, y lo viene a contar ahora cuando han pasado 30 años; agrega que tiene pesadillas recurrentes y un grado de culpa de haber sido obligado a salir, culpa de no haber asegurado a sus compañeros antes de salir,

Al punto de prueba número seis señala que la relación es directa, el origen de esta situación está en el Estado y por los agentes que ocasionaron los daños y por el no reconocimiento de hacer justicia

## 2. HORACIO AGUSTIN RAMMSY TRIVIK





Al punto de prueba número uno señala que viene en declarar por don Juan Carlos Gaete, relata que lo conoció en España, reencontrándose en Bulgaria al estudiar allá. Indica que supo que lo habían detenido con otra persona más y que le habían dado una golpiza, ocurriendo esto en 1975, según le parece, agrega que nunca supo donde estuvo preso y que él nunca le comentó en detalle, supo por referencias del grupo. No sabe cuánto tiempo estuvo preso, al parecer unos 10 o 15 días. Señala que don Juan Carlos estudiaba en la universidad, debiendo tener unos 22 o 23 años cuando fue detenido, era un joven soltero. Sabe que fue agredido. Agrega que estas personas que sufrieron, la mayoría eran para adentro pero se sabía porque era por grupos de amigos de apoyo. Indica que en España se juntaba con un grupo de exiliados que conocían un poco más su historia.

Al punto de prueba número dos señala que fue ocasionada por agentes del Estado. Detuvieron a don Juan Carlos por estar habitando con una persona que era de un partido político y porque él era Vicepresidente de la FECH, señala que fue por motivos políticos.

Al punto de prueba número cuatro indica que don Juan Carlos primero perdió su carrera de estudiante, fue golpeado y maltratado, tuvo que salir de Santiago y tuvo que abandonar el país para sobrevivir. Fue expulsado cuando era estudiante de pedagogía y no le permitieron estudiar. Señala que tuvo contacto con él, el año 1977 o 1978, llegó a España a trabajar en un bar, estudiaba y trabajaba, luego se fue a Bulgaria, donde sacó el título de psicólogo e hizo un doctorado en psicología. Tenía contacto ocasionalmente con su mamá, perdiendo contacto con su familia. Señala que lo ha visto poco desde que volvieron a Chile, agrega que el grupo de amigos en Bulgaria era porque todos eran chilenos.

Al punto de prueba número seis señala que hay una causa y efecto entre ambos, entra la tortura, la detención y los daños.

### 3. MAURO ALONSO NAVARRETE JEREZ

Al punto de prueba número uno señala que viene a declarar por don Miguel Barrientos. Relata que don Miguel estudiaba en la Católica de Santiago, campus oriente, entró el año 1983 a estudiar filosofía, el año 1984



por protestas por la detención de un estudiante lo tomó detenido Carabineros de Chile, y en ese contexto, en la 19° Comisaría que está en providencia con Miguel Claro, lo llevan a otro lugar, al subterráneo, del cuartel agentes de la CNI, donde lo torturan, le pega, fotografías desnudos y otras vejaciones, con interés de llevárselo del lugar; indica que por lo que entiende estuvo un par de días en esa comisaría, alrededor de una semana. Salió de la comisaría y le notifican de rectoría que era expulsado de la universidad año 1984, en las protestas nacional asiste a la concentración del barrio y lo toman detenido civiles, eran de la PDI pero día ser de la CNI, esto ocurrió dos meses después de que lo expulsaran, lo meten en una cajuela y lo tienen detenido una semana y luego lo pasan 3 semanas a la cárcel de San Miguel, sufrió violencia física y psicológica en todo este proceso, lo desvistieron, lo pateaban, lo colgaron, cometieron actos de tortura.

Al punto de prueba número dos señala que participaron tres instituciones, carabineros, PDI y CNI.

Al punto de prueba número cuatro relata que la naturaleza de estos hechos provocó graves daños morales, psicológicos, económicos y familiares. Señala que lo conoce porque estudiaron la misma carrera hace 10 años, indica que es retraído, aislado, le cuesta tener confianza en las demás personal, señala que su problema para socializar explica porque se dedica a trabajar en la noche como guardia cuidando dependencias sin ningún tipo de relación con personas. Estudió sociología y entraron juntos el año 2013, con 18 y 48 años respectivamente, él le indicó que logró entrar a estudiar por la beca valech, sino no podía por temas económicos. Agrega que tuvo que salir al extranjero, porque lo van a visitar a la casa civiles, volviendo a los 90, tiene una hija y era comerciante ambulante y guardia, respondiendo esta situación al daño económico y a la informalidad, no teniendo protección social, sufriendo discriminación por su edad. Señala que ha seguido estudiando, hizo un magister en la Universidad de Chile y sigue sufriendo los daños y consecuencias del daño económico y moral, al estar en una edad difícil de contratar. En lo familiar, indica, sus familiares fueron allanados después de su segunda detención y tortura, por eso sale del país y



se va a Colombia, su familia lo reprocha porque lo marcó el hecho que lo persiguieran, se le cerraron las puerta de poder visitar a su familia en el sur por 15 o 20 años, con el correspondiente daño familiar.

Respecto al punto de prueba número seis, indica que los daños se generaron por la rebaja en su calidad de humano, los daños le generaron consecuencias de memoria, en el cuerpo, emociones, daño moral psicológico por la tortura, laboral y económico por truncar la carrera y por la persecución política y daño familiar por dejarte marcado.

#### 4. VERÓNICA ISABEL HERNANDEZ AYALA

Al punto de prueba número uno señala que viene a declarar por Miguel Barrientos Álvarez. Señala que él tuvo dos detenciones, la primera de ellas fue en junio de 1984 y fue porque estudiaba en la Católica de Santiago, estudiaba filosofía, expulsaron a un compañero de ellos y don Miguel junto a otros compañeros se tomaron una sala como protesta, llegó carabineros al desalojo, le “sacaron la mugre”, ella recuerda ver llorar a la mamá de él; agrega que en un calabozo llegaron los CNI y lo patearon, fotografiaron desnudo, esto ocurrió en junio del 84 y estuvo preso cerca de una semana, lo llevaron a la 19° Comisaria. Agrega que posteriormente lo echaron de la universidad, lo dejaron en una lista que no podría entrar a ninguna Universidad de Chile a estudiar. Señala que la segunda detención fue ese mismo año, en septiembre, fue una protesta general de paro, le volaron los dientes, las paletas se las tiraron de antas patadas que le dieron, lo metieron a una cajuela de un vehículo y lo patearon y pegaron y llevaron a un cuartel de la PDI, allí estuvo como una semana y se lo llevaron a la cárcel de San Miguel y estuvo como 15 días.

Al punto de prueba número dos señala que si participaron agentes del Estado en la detención y tortura.

Al punto de prueba número cuatro señala que daño moral, familiar y laboral, económico. Relata que lo conoce desde el año 80 u 82, antes de ser detenido, él llegó de Puerto Octay, sus papás eran separados y la señora Nidia vivía con su nuevo marido, señala que era brillante, súper inteligente, dio la prueba y le fue súper bien, entrando a la católica. Relata que fueron



a allanar la casa de la señora Nidia, madre de don Miguel, y el finalmente se fue del país, estaba súper mal, nunca más se la creyó, perdió seguridad. En términos familiares fue horroroso, nadie lo quería ver en Puerto Octay, Estudió sociología y es guardia nocturno. Le cuesta socializar, prefiere trabajar solo en la noche, antes de la detención era súper activo, hacían clases a los niños para que aprendiera a leer y todo eso cambió. Él salió del país porque era una persecución, allanaron la casa de su mamá porque lo buscaban a él y de ahí viene el rechazo de la familia.

Al punto de prueba número seis señala que la detención sí generó como consecuencia todo el daño ya relatado, hay un antes y un después.

##### 5. SANDRA ROMANE ESCAFF DEL VALLE

Al punto de prueba número uno señala que viene a declarar por don Sergio Gonzalo Barraza. Relata que él fue detenido el 07 de septiembre de 1987, llegando tres vehículos a la casa de su madre, descendiendo personas de civil formal y se metieron a la casa, andaban armados, ella estaba dentro y los vio adentro de la casa, indica que venía la mamá de Gonzalo con ellos en el vehículo y que por eso él salió de la casa. Agrega que él no era buscado desde ante, él llegó allá y allí supieron que lo iban a detener, no recuerda en que trabajaba pero no era político, él políticamente organizaba temas de discusión por la contingencia, era trabajador normal más que político. Ella supo que le pegaron, lo metieron al auto y lo pusieron cabeza abajo, se lo llevaron a un lugar que desconoce, estuvo detenido 15 días, pasando de un lugar a otro. Indica que estuvo en una celda y lo golpeaban, le pusieron corriente en sus zonas íntimas; luego volvió donde su mamá e intentó ir a verla pero no la quiso recibir. Allanaron su domicilio y dieron vuelta su casa.

Respecto al segundo punto de prueba indica que participaron agentes del estado que no se identificaron pero sí andaban armados.

Al punto de prueba número cuatro señala que después del incidente, don Sergio quedó temeroso, desconfiado, situación que a la larga le generó como paranoia, su familia también se vio afectada, todos se encerraron y tenían miedo, en general todo su grupo familiar, incluyendo a la familia de



ella. Él se volvió cauteloso, no entregaba información, estuvo encerrado un tiempo. Su situación económica se vio afectada porque tenía trabajos precarios con ingresos precarios. No pudo acceder a una beca, por lo que no pudo seguir estudiando; la movilidad social no se dio en su caso. Señala que es impulsivo, siempre acelerado; su familia también fue afectada.

Al cuarto punto de prueba señala que hay relación definitivamente de causa y efecto entre lo declarado y lo que le sucedió.

## 6. MARÍA ELISA DEL VALLE DURÁN

Sobre el primer punto de prueba, señala que declara por don Gonzalo Barraza. Relata que el 07 de septiembre de 1987 él estaba en su casa y llegaron vehículos, ella lo vio cuando habrían rodeado, él iba a arrancar pero vio a su mamá en el auto y no pudo. Indica que él estaba en su casa porque era compañero de sus hijos desde chico y lo conocían, no sabían que era buscado por la CNI, agregando que fue arrastrado cuando fue detenido y que fueron agentes de civil, grandes y armados, lo llevaron al auto y le pegaron patadas, le pusieron corriente afuera y las vecinas gritaban hasta que dejaron de hacerlo pero le siguieron pegando. Revisaron su casa, dieron vuelta colchones y pasaron una máquina redonda grande por el suelo. Se llevaron a don Gonzalo, no sabe a dónde, pero sabe que estuvo 15 días. Luego les contó que le ponían corriente, lo golpearon, lo colgaron.

En cuanto al segundo punto de prueba, indica que fueron agentes del estado.

Respecto al punto de prueba número cuatro señala que psicológicamente le hicieron mucho daño, no salía, quedó asustado, antes era muy participativo, celebraba pero después ya no. Andaba temeroso que lo podía venir a buscar. Dejó de compartir con los hijos de ella. Él trabajaba atendiendo un casino, pero no lo pudieron recibir por ser preso político, no podía trabajar. La familia de él andaba triste y asustados de que llegaran a su casa. Señala que él tiene una hija y no se casó, porque siempre tuvo la preocupación de que lo volvieran a buscar.



En cuanto al sexto punto de prueba señala que el temor y la falta de trabajo fue generado por la detención y eso afecta a toda familia.

## 7. JOSÉ CARLOS CURIPAN TOLEDO

Al primer punto de prueba señala que viene a declarar por don Marcos Huaquilaf. Relata que se enteró a mitad del año 1984, junio o julio, que don Marcos participó en una topa en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, participó en esta manifestación y fueron expulsados por carabineros y detenidos, luego llevados a un recinto de detención en Providencia, ahí estuvieron unos 6 o 7 días, siendo interrogados por la policía y CNI, fueron torturados y sometidos a otros vejámenes. Agrega que estaban en un subterráneo, los insultaban, vejaban, pegaban. Señala que conoce a don Marcos desde 1997 y que él le comentó que estuvo detenido con varias personas más, que lo agredieron con golpes de puño, golpes de pie y donde le llegaban los golpes. Indica que don Marcos tuvo participación activa en esa toma, más no tenía militancia política.

Al segundo punto de prueba indica que en la detención participaron Carabineros y que en la tortura participó la CNI.

Al cuarto punto de prueba indica que respecto al daño material, se debe considerar todo el dinero que gastó en una carrera que estudió cuatro años, la que quedó botada al prohibírsele el reintegro a cualquier Universidad por cinco años, sumado al daño moral que genera la situación. Agrega que si bien estudió otra carrera, no lo hizo por vocación. Señala que trabajó repartiendo volantes, haciendo cualquier oficio menos lo que había estudiado, actualmente trabaja en una Municipalidad. Indica que luego de la detención, don Marcos, tuvo que volver a la casa de sus padres, donde lo acogieron como un hijo caído en desgracia, desmoronándose las ansias de tener un hijo profesional en su familia. Señala que don Marcos es muy reservado, no lo conoce mucho en profundidad.

Al sexto punto de prueba señala que si cree que hay una relación de causalidad.

## 8. MANUEL PATRICIO DÍAZ CALFIU



Respecto al primer punto de prueba, indica que viene a declarar por don Marcos Huaquilaf Gómez. Señala que a mediados de 1984, en una movilización en el campus oriente de la Universidad Católica, la policía lo tomó detenido y lo llevó a la 19° Comisaría de Providencia, donde sufrió apremios ilegítimos por carabineros, PDI y por la CNI. Indica que don Marcos estudiaba filosofía en el campus oriente y que protestaban por la expulsión de un compañero, él estaba como estudiante que solidarizaba con las causas sociales y con las ideas de izquierda. En la 19° Comisaría estuvo en el calabozo, donde fue torturado junto a otros compañeros, recibiendo golpes, punta pies, insultos, amenazas. Agrega que le quedaba un año para egresar de la carrera y sus estudios se vieron truncados porque fueron expulsados. Agrega que lo conoce desde el año 2001.

En cuanto al punto de prueba número dos, señala que si participaron.

Respecto al punto de prueba número cuatro, indica que hubo perjuicio psicológico, agregando que el recuerdo es duro, da miedo, temor, agrega que don Marcos evita algunos espacios cerrados, teniendo un poco de claustrofobia. En cuanto a lo económico, señala que vio truncados sus estudios, debiendo batirse en distintas circunstancias para mantenerse y mantener a su familia; en lo social, indica que ha sido tildado de izquierda, como comunista, agregado a ser mapuche, le ha causado discriminación en diversas circunstancias. Agrega que al estar vetado para estudiar, no le fue sencillo retomar los estudios más logró terminar pedagogía en historia; señala que lo conoce porque él era profesor de historia y lo entrevistó y lo ayudó a entender la formación profesional. Señala que al haber estado en una institución de prestigio, muchas oportunidades que le pudieron haber presentado se vieron coartadas, estando años sin estudiar. Agrega que él ha tratado de proseguir con la vida, teniendo una capacidad de resiliencia importante, pero no deja de ser la presión general que tuvo al no poder continuar sus estudios con todo lo emocional, psicológico y familiar que la situación conlleva.

Al punto de prueba número seis indica que si están vinculados.



**OCTAVO:** Que por su parte, la parte demandada acompañó el oficio tramitado al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo informe sobre los beneficios por reparación recibidos por las demandantes en calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, en virtud de las leyes 19.992 y 20.874, consta a folio 32 del cuaderno principal.

**NOVENO:** Que previo a pronunciarse el Tribunal sobre las diversas alegaciones de las partes, resulta fundamental para esta sentenciadora señalar que el caso de marras versa sobre indemnización de perjuicios reclamada al Estado de Chile, a partir de violaciones a los derechos humanos en la comisión de delitos denominados de lesa humanidad o crímenes de guerra, cometidos por agentes del estado en su representación y financiados por este, cuyas actuaciones son reconocidas, en el caso de marras, a partir del informe emitido por la Comisión Valech.

**DÉCIMO:** Que a partir de lo anterior, el Estado de Chile efectuó un reconocimiento de la comisión de estos ilícitos a través de la Comisión ya nombrada.

La responsabilidad estatal versa en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, conformes a los cuales el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, recogiendo y aplicándose entonces lo preceptuado por el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 18.575, como el derecho de toda víctima a ser reparada en los daños causado “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado”, principios y derechos refrendados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, si bien la responsabilidad del Estado se funda en los artículos citados, la integración de instrumentos Internacionales que versan sobre Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, a través del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política, impide al Estado aplicar el derecho interno con el fin de eludir su responsabilidad,





debiendo reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental que por su naturaleza, la acción que pretende su resarcimiento, es imprescriptible. Ya lo señala la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema: “A mayor abundamiento, se señala que el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos; y si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece a su índole humanitaria, en protección a los derechos humanos, reconocidos en la norma internacional citada, que primea sobre la preceptiva de derecho interno, en especial el artículo 2497 del Código Civil”. (Fallo Rol C-2289-2015, 29 de marzo de 2016).

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva opuesta por la demandada, indicando que el actor es beneficiario de las prestaciones ideadas por el Estado a través de la Ley 19.234 y 19.992 y en razón de ello ya existe una reparación del daño, esta sentenciadora considera que la calidad de víctima no es excluyente de la pretensión indemnizatoria de la presente acción, toda vez que las medidas de las leyes indicadas fueron creadas de forma general sin consideración a cada caso en particular, sin poder presumir que el Estado a través de dichas efectuará una reparación íntegra del daño causado.

Que a mayor abundamiento, que el Estado asuma su participación y colaboración en los hechos y pretenda el cumplimiento del deber de resarcimiento para con las víctimas, no importa para ellas la renuncia de sus formas, ni exclusión de otras medidas de reparación.

**DÉCIMO TERCERO:** Que sobre la excepción de prescripción de la acción invocada por la demandada, dicha parte solicita la aplicación de las normas del Código Civil en virtud de justificar la existencia de ésta a fin de otorgar certeza de las relaciones jurídicas, el resguardo del patrimonio y la libre circulación de los bienes, no obstante, imperativo resulta señalar que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha reiterado que en el caso de delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible,



resultando contradictorio y poco coherente que la acción civil no siguiera este mismo razonamiento.

Lo anterior resulta comprensible a partir de que el hecho lesivo consiste en un crimen de guerra o delito de lesa humanidad, especialmente contenido en el artículo 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que son parte integrante del ordenamiento jurídico nacional por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

**DÉCIMO CUARTO:** Que la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo N°355 de 1990, del Ministerio de Justicia tuvo por objeto, conforme a su artículo 1º: *"...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años"*, procurando en cumplimiento de dicho cometido, establecer un cuadro lo más completo posible sobre los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.

A su vez, la ley N°19.123, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, correspondiéndole esencialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas.

Por Decreto N°1040, de fecha 26 de septiembre de 2003, se dispone la creación de la Comisión Valech, que tendría la finalidad de asesorar a la presidencia de aquel entonces y suplir información faltante y deficiencias de la Comisión Rettig, que solo contemplaba quienes habían muerto a manos de agentes del estado durante el período de dictadura militar, incluyéndose ahora los casos de prisión y tortura que no fueron contenidas en el informe anterior.



El informe Valech contiene la nómina de víctimas establecida por la Comisión y ha servido de base a los beneficios dispuestos por la Ley N° 19.992.

En la referida nómina de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se reconoce a don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, bajo el N°5853 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech II); a don Juan Carlos Gaete Castro, bajo el N°3253 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech II); a don Sergio Gonzalo Barraza Benavides, bajo el N°2650 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech I); a don Miguel Barrientos Álvarez, bajo el N°952 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech II) y; a don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, bajo el N°4130 de la nómina de víctimas realizada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en etapa de reconsideración (Valech II), siendo por tanto declarados víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

**DÉCIMO QUINTO:** Que según la jurisprudencia y doctrina, en un sentido casi unánime, señala que la acción penal resulta imprescriptible, no resultando aplicable las normas civiles de prescripción de la acción, por resultar contrario al sistema Internacional de los Derechos Humanos, entendiéndose integrados a nuestro Ordenamiento Jurídico por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, asumiendo por ello el Estado chileno la obligación de instaurar el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a la reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito. Que a esto es lo indicado en el artículo 1° de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimines de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, que establece que estos delitos son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

Que a mayor abundamiento, la ley 19.123 justifica su creación en el reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se



perpetuaron en el país, a las familias de aquellos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que fueron víctimas directas de acciones realizadas por agentes del estado, a través de regalías de carácter económico o pecuniarias.

**DÉCIMO SEXTO:** Que resulta fundamental para un estado de derecho democrático otorgar un tratamiento especial a los casos de crímenes de lesa humanidad en los que tuvo participación y activa colaboración del Estado, aplicándose a este una prolongación en el deber de reparación integral de las víctimas.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que a lo anterior, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deber hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomar las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculcados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la



salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio”; y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que la demanda efectuada en contra del Fisco tiene asidero en los ejes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose Chile suscrito a dichos, obligándose al reconocimiento y completa protección al derecho de íntegra reparación de los daños provenientes de estos delitos.

**DÉCIMO NOVENO:** Que bajo este prisma de protección y aplicación del derecho internacional, no es aceptable el cuestionamiento a la aplicación normativa que verse sobre Derechos Humanos, y menos aquellas que ordenan la reparación por parte de los Estados, bajo el argumento de la protección del derecho interno, por cuanto se compromete la responsabilidad del Estado de Chile, de los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, así como el principio de buena fe comprometido con las normas *Ius Cogens* o costumbre del Derecho Internacional.

Que a esto, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, razones suficientes para rechazar las excepciones de reparación satisfactoria, de prescripción extintiva de la acción y en subsidio las alegaciones vertidas por la demandada.

**VIGÉSIMO:** Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado, y la circunstancia de detención, prisión política y tortura de don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, don Juan Carlos



Gaete Castro, don Sergio Gonzalo Barraza Benavides, don Miguel Barrientos Álvarez, y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, y que no habría tenido lugar sin la intervención de funcionarios estatales, ésta no se hubiera producido, queda por dar establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que la responsabilidad trae aparejada la indemnización o reparación de los daños sufridos por la demandante.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que a partir oficio de fecha 13 de septiembre del 2023, remitido por el Instituto de Previsión Social, se da cuenta que don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

Respecto a don Juan Carlos Gaete Castro, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, se da cuenta que ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

Respecto a don Sergio Gonzalo Barraza Benavides, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, se da cuenta que ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

En cuanto a don Miguel Barrientos Álvarez, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, se da cuenta que ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

Finalmente, respecto a don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, han recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que ha causado el agravio.



**VIGÉSIMO CUARTO:** Que el pago de la indemnización de perjuicios a pagar, deberá ser reajustada desde la fecha en que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada hasta su pago efectivo según la variación de índice de precios al consumidor (IPC), debiendo agregarse a tal suma de dinero los intereses corrientes devengados para operaciones no reajustables de dinero a contar desde que la presente sentencia definitiva adquiera su carácter de firme y ejecutoriada.

Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y artículos 144, 170 y 254 y siguientes, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

I.- Que el Estado de Chile debe pagar a cada uno de los demandantes, don Tomás Eugenio Muñoz Tolosa, don Juan Carlos Gaete Castro, don Sergio Gonzalo Barraza Benavides, don Miguel Barrientos Álvarez, y don Marcos Francisco Huaiquilaf Gómez, a modo de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$80.000.000.- de pesos, con los reajustes e intereses que se indican en la consideración vigésimo cuarto.

II.- Que por resultar totalmente vencida la demandada, se le condena al pago de las costas.

Regístrese.

**ROL N° C-7035-2023**

**Pronunciada por don Álvaro Cayuqueo Pichicón, Juez Suplente.**



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta y uno de Enero de dos mil veinticuatro**

